



Problemas estructurales de la economía y la sociedad colombiana

Para entender mejor lo que acontece en el país, vamos a hacer referencia a algunos aspectos que caracterizan a Colombia. Teniendo en cuenta estas características o dimensiones estructurales y objetivas de la sociedad colombiana, podemos entender los conflictos que vivimos y tenemos más posibilidades de reconstruir el país en lo social, en lo económico, en lo político y en lo cultural. Es también a partir de allí que podemos ensayar un análisis más coherente de la problemática que vive el Pacífico y sus pobladores.

Estos problemas estructurales de Colombia, que contribuyen a alimentar y reproducir la crisis de la sociedad colombiana, se manifiestan en diversos campos de la vida del país. Aquí los presentamos de forma resumida y sin observar un orden de importancia.

1. Falta de presencia territorial del Estado colombiano

Hay regiones del territorio nacional en donde el Estado no tiene presencia. Parece ser mas una característica de los países pobres y dependientes. Algunos de estos espacios han sido baluartes de rebeliones campesinas, indígenas y epicentros de movimientos regionales a lo largo de la historia de Colombia. Otros han sido tradicionalmente regiones olvidadas por el gobierno central. Esto tampoco es nada nuevo en el contexto latinoamericano.

Hacia estas regiones, con características selváticas y semiselváticas, se volcó a mediados del siglo pasado una colonización desde el centro del país. Esta colonización la han llevado a cabo campesinos sin tierra, desencantados de la lentitud y/o fracaso de las políticas de reforma agraria. Zonas del piedemonte llanero en Arauca y Casanare, del Urabá, del Ariari, del Magdalena Medio, del Pacífico, del Guaviare, del Caquetá y Putumayo, se fueron así articulando al país sin control alguno del Estado. En algunas de estas zonas se encuentran las actuales explotaciones petroleras y se vienen conformando grandes plantaciones de banano y palma africana. Pero también ha venido surgiendo una economía basada en el cultivo y procesamiento de la coca, que para la última década convirtió a Colombia en el principal país cultivador de coca y procesador de cocaína. En pocos años, estas regiones antes olvidadas y marginadas, comenzaron a ser generadoras de grandes rentas.

Una característica de estas zonas es que allí hay una gran movilidad territorial, de gente que entra y sale o se desplaza de un lugar a otro. Este desarraigo contrasta con una casi nula movilidad social. Allí no se progresa, apenas se sobrevive, pues estas jugosas rentas no han colaborado en el desarrollo social y económico de estas regiones y sus pobladores. Otra característica importante es que estas zonas son objeto de disputa entre sectores armados, pues tener el control de estos espacios y de su economía legal e ilegal es vital para el financiamiento de sus acciones. En pocos años se tornaron en las zonas más violentas del país.¹

En estas zonas el Estado ha perdido el control (quizás nunca lo ha tenido), ante la insurgencia guerrillera. Esta insurgencia, que se remonta a los años 50 y que tiene sus orígenes en la problemática del campo colombiano, ha logrado ampliar y consolidar su predominio territorial en vastas zonas del país, suplantando allí al Estado.

¹ En estas regiones también se da una pugna por lograr el control de rentas asociadas a la explotación de recursos naturales, por la posesión de tierras fértiles o el dominio de territorios geopolíticamente estratégicos. Por estas zonas se realizan las exportaciones ilícitas y el contrabando, incluido el de armas.

En otros casos el Estado ha cedido espacios. Preocupante en este caso es el hecho reiteradamente mencionado por organismos de DD.HH, de que las fuerzas militares han cedido espacios a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que operan en el territorio nacional, para realizar acciones militares en diferentes zonas del país. Estas acciones, junto con la de los otros grupos armados, son las que han llevado al desplazamiento interno de cerca de dos millones de personas en los últimos 10 años y a la fragmentación y pérdida de territorialidad de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

2. Crisis de legitimidad del Estado colombiano

En la última década se ha venido agudizando en Colombia el proceso de desinstitucionalización en curso desde hace muchos años. La crisis económica que vive el país ha contribuido a ahondar este proceso. Esta desinstitucionalización y la confrontación política que vive el país vienen alimentando de tal manera otras formas de violencia, que los actores políticos y el Estado no pueden controlar sino una parte de todo este contexto. Es más, no se sabe a ciencia cierta en que medida el gobierno mantendrá el control sobre muchos sectores de la sociedad².

También se tienen serias dudas sobre la capacidad del gobierno de mantener el control, aún sobre sectores de la administración del Estado y de sus propias fuerzas armadas, elementos que aumentan la incertidumbre.

Esta precariedad del Estado colombiano y su postración ante los intereses económicos privados, legales o ilegales son aquellos rasgos característicos del país que más han contribuido a su ingobernabilidad.

3. Pérdida de legitimidad de los partidos de masas

Ante la creciente pauperización de amplios sectores de la sociedad colombiana, son cada vez menos las personas que pueden ejercer sus derechos como ciudadanos.³ El verdadero ciudadano, es aquel que conoce a cabalidad sus derechos como individuo y sus deberes con la sociedad a la cual pertenece. Es aquel que ejerce el derecho a participar en todo aquello que le concierne y es consciente que de su gestión e intervención en los asuntos públicos, depende el mejoramiento de las condiciones de vida de su sociedad. Es también aquel que no está dispuesto a delegar automáticamente a un partido o a un representante, los asuntos que conciernen a su vida y al futuro de su comunidad o sociedad. Ese tipo de ciudadano es un "especimen en extinción" en nuestro país. De esta realidad siempre se ha nutrido el clientelismo⁴.

La afirmación anterior debemos matizarla diciendo que también hay procesos de "esclarecimiento" en muchos sectores de la población, que hacen que cada vez sea más difícil "representar a la gente". Es creciente el número de personas que no entregan la representación de sus intereses a los partidos de masas (independiente de su ideología). Y no es porque de la noche a la mañana se haya generado una conciencia crítica en vastos sectores de la población, que los hubiera llevado a concebir la necesidad de cambios estructurales en el sistema político colombiano. Es

² El 21 de noviembre de 2000, FEDEGAN, la organización de los ganaderos, se pronunció contra el gobierno, exigiendo la conformación de "Milicias Nacionales" para combatir a la insurgencia guerrillera. En caso contrario, y en abierta rebeldía contra el gobierno, amenazó con ejercer el legítimo derecho a armarse para defender sus intereses.

³ Existe una correlación entre la exclusión de los medios de subsistencia y la exclusión de la participación ciudadana.

⁴ El "*clientelismo*" es la práctica que utilizan los gamonales y jefes políticos de una región para amarrar a la población electoralmente. Es una especie de cambio de bienes, dinero o empleos por fidelidad política. La adhesión a un gamonal se compra en algunos casos con obras de beneficio colectivo, en otros casos con el pago en dinero de los votos. En la actualidad no hay fidelidades incondicionales a ningún jefe electoral. El "tamaño" de la adhesión depende del monto ofrecido. Las clientelas pueden cambiar de "patrón" de una elección a otra. Muchas veces es la única posibilidad que tienen pobladores de una región marginada de acceder a un puesto de salud, a una escuela o a que le abran una vía carretable. Y es debido a esto que es común encontrarse políticos con amplias "bases sociales" (clientelas) a pesar de que son conocidas por sus propias clientelas sus actuaciones corruptas, lo que manifiestan públicamente.

porque cada vez más se dan cuenta de que los partidos de masas no representan sus intereses. De allí que se encuentren en la búsqueda de nuevas formas de participación política, más reales y más acordes con su situación de excluidos.

Desde hace una década ha venido creciendo un margen de expresión propia y autónoma de las comunidades, sean estas urbanas o rurales y ya la "opinión pública" no se define solamente, como antes, por las identificaciones con los partidos políticos de masas.

No obstante existir esta desconfianza creciente frente a los partidos de masas y frente al Estado, las comunidades y los sectores organizados no ha logrado trasladar a la esfera de la política ese margen de expresión propia y aún menos encontrar el camino para conformar un polo de poder alternativo al sistema oligárquico que gobierna al país.

4. Crisis de legitimidad de la insurgencia guerrillera

La crisis de legitimidad política no afecta solamente al Estado y a los partidos políticos. Las fuerzas que lo combaten también han derrochado el caudal político que tuvieron en el pasado y que ante el sometimiento y desplazamiento masivo de campesinos, le dieron alguna legitimidad. No nos estamos refiriendo aquí a la pérdida de vigencia de las luchas armadas revolucionarias con la caída de los regímenes socialistas. Estamos hablando de la pérdida de sus bases de apoyo que les impide transformarse en fuerzas políticas.

Pero el tránsito de las armas a la política también se ve cada vez más obstaculizado por la importancia que adquiere en el engranaje de la guerra la implantación de una economía ilegal basada en la producción y comercialización de drogas ilícitas, que terminó banalizando la guerra. Territorios y poblaciones enteras quedan sometidas a una especie de "clientelismo armado" de todos los actores armados para involucrar en sus filas a poblaciones indígenas, campesinas y afrocolombianas que están por fuera y hacen ingentes esfuerzos por mantenerse al margen del conflicto armado, esfuerzos que hasta el momento han sido infructuosos, ya que son estos sectores las principales víctimas de la dinámica de esta guerra, cada vez más vacía de proyectos orgánicos alternativos.

Al cobrar fuerza la intimidación y la dominación por medio de las armas, cada vez se vuelve más ilegítimo el accionar de la insurgencia guerrillera.

5. Suplantación del derecho y la ley por el imperio de la violencia y el poder de la fuerza

Poder tramitar pacíficamente las tensiones y conflictos que se presentan en todas las sociedades, se ha convertido en una de las más importantes reivindicaciones del pueblo colombiano. El tacto, la paciencia, la simpatía, la tolerancia, el respeto, la confianza, son categorías que vienen perdiendo vigencia en Colombia. La destrucción de tradiciones, valores y comportamientos asociados a estas categorías han contribuido a la pérdida de la convivencia ciudadana, al desarraigo y a desestructuraciones socioculturales de las comunidades. La causa principal de esta fragmentación del tejido social colombiano es la violencia que vive el país.

El promedio de muertes violentas de la última década es de aproximadamente 32.000 personas al año, siendo la primer causa de mortalidad en el país. A juicio de Daniel Pécaut, la violencia en Colombia es una situación generalizada y difusa, donde los diferentes fenómenos y formas de expresión como se presenta (violencia política, conflicto armado, asesinatos, desplazamientos, extorsiones, desapariciones, secuestros, violencia común) interactúan y se retroalimentan, creando un círculo vicioso ascendente y acumulativo.

En Colombia existe una gran tradición de desobediencia a las leyes. Y existen buenas razones para ello, pues en el pasado ellas permitieron legitimar la apropiación privada

de bienes y riquezas colectivas. En esto los pueblos indígenas a lo largo de la historia, tienen el mayor acumulado de experiencias. Pero esta desobediencia, que aquí podría verse como respuesta de los pueblos ante un Estado al servicio de intereses privados privilegiados, ha venido ampliando su espectro de acción en las últimas décadas.

La evasión fiscal⁵, el contrabando, la posesión ilegal de la tierra, el robo de los dineros públicos, la apropiación privada de las riquezas de la Nación, el caciquismo, las elecciones fraudulentas, la compra de votos, el secuestro y por último el narcotráfico, con todas sus secuelas de corrupción, violencia y capacidad desestabilizadora, han terminado por desinstitucionalizar al país.

El clientelismo, la crisis de representación política y la instauración de la fuerza y la intimidación para asegurar lealtades partidistas, han socavado el ordenamiento jurídico y la aplicación de la justicia en derecho, cuyo monopolio debiera estar sólo bajo la responsabilidad del Estado. En la medida en que el Estado se reduce en materia de justicia, crece el espectro social de aquellos que se arrojan la potestad de imponer y aplicar, por la vía de los hechos, sus propias leyes. Este fenómeno, que Luis Jorge Garay llama "*aculturación de la ilegalidad*", viene beneficiando a aquellos sectores poderosos que recurren casi que exclusivamente al uso de la fuerza para el logro de sus fines políticos y económicos.

6. Clientelismo y corrupción

El *clientelismo* ha sido la forma más eficaz para retener el poder local. Tiene sus orígenes en la Colombia rural del Siglo XIX, en la cual los caudillos políticos locales cuestionaban la autoridad central de un Estado débil y propiciaban guerras para defender y ampliar sus intereses, básicamente ligados a la posesión de la tierra y de los recursos naturales, pues eran los bienes que ofrecían rápidamente una renta. Cuando el Estado se consolida y surgen los partidos políticos, las prácticas clientelistas, lejos de disminuir, se acrecientan. Pues los gamonales necesitaban mantener el poder local, para desde allí controlar el Estado y garantizar la expedición de leyes o gabelas favorables a sus intereses. Sobre todo en momentos en que se estaba definiendo en el país la propiedad de la tierra.

Los electores de esa entonces Colombia rural estaban en el campo. Cautivar estos votos garantizaba mayorías políticas y, por supuesto, el control del Estado y la manipulación de políticas públicas a su favor. Este control del Estado servía también (es lo más común) para utilizar el presupuesto estatal en su propio provecho, o aún, (más común aún) para desfalcarse las arcas del Estado.

Este proceso de control y dominio sobre territorios y población no estaba exento de conflictos. Por lo regular la autoridad se imponía mediante el engaño, el amedrentamiento y la persecución, cuando no mediante la expulsión y la violencia contra los adversarios políticos. Hoy, un siglo después, la Colombia rural y analfabeta de entonces ha cambiado mucho. No obstante persisten, aunque transformadas y encubiertas por ideologías partidistas, las condiciones políticas que le dieron vida al clientelismo y a la corrupción.

El drama que vive el país, es haber entrado al Siglo XXI, sin haberle dado solución a problemas que arrastramos desde el Siglo XIX. La diferencia radica en términos cuantitativos. Las riquezas naturales que tienen demanda en el mercado mundial (incluida la cocaína) y que son apetecidas por sus rentas, son hoy más numerosas. Las armas para apropiarse de estos recursos son más sofisticadas, los métodos más crueles y el número de muertos y desplazados es mayor.

7. Deterioro de las condiciones de vida del campesinado

La ausencia de una política de tierras y de productividad agraria en favor del campesinado, ha sido el origen de todas las violencias que ha vivido el país. En los

⁵ Expertos en la materia opinan que si en Colombia todos pagáramos los impuestos y estos no fueran robados, el estado podría brindarle salud y educación gratis a todos los colombianos.

últimos 20 años Colombia ha experimentado un proceso tal de concentración de propiedad de la tierra con dineros del narcotráfico, que ha revertido el proceso de reforma agraria de los 30 años anteriores.

La tenencia de la tierra ha sido en amplias zonas del país el método más eficaz del control y poder políticos. El latifundio ha sido también la fuente en que han bebido los partidos que tradicionalmente se han opuesto a las transformaciones estructurales del país. Poco ha interesado a los grandes hacendados un desarrollo productivo del agro mediante el aprovechamiento de las excelentes condiciones climáticas y de suelos que tiene el país, y la aplicación de técnicas productivas eficientes. Entendidos en la materia hablan de que un 25 por ciento de las tierras abiertas del país serían suficientes para alimentar a la población colombiana y aún para exportar excedentes. Infortunadamente la alta concentración de la tierra y su utilización para la ganadería extensiva, no posibilita un acceso más racional a la tierra y un uso de acuerdo a sus aptitudes agroecológicas.

Es este modelo ganadero de ocupación territorial el que ha excluido a los campesinos de la tierra, ha propiciado desplazamientos de población hacia la frontera agrícola, ha transgredido las reservas forestales y ha fomentado los cultivos ilícitos.⁶

8. Políticas económicas que privilegian intereses privados, en detrimento de intereses colectivos

Mucho se ha hablado en términos teóricos de las bondades de la "Apertura Económica" y de las políticas económicas de corte neoliberal impulsadas por los tres últimos gobiernos. Pero poco se ha hablado de la forma como (y en que medida) esta apertura ha contribuido a erradicar las anomalías estructurales de la economía colombiana, a servir de base para un ordenamiento democrático del país y a generar más riqueza con equidad social, reconstruyendo el concepto de *lo público* y colocando en el centro de la economía a la producción y al trabajo como factores generadores de riqueza. Se daba por sentado que esta apertura económica, iniciada con la administración de Cesar Gaviria Trujillo, fortalecería y modernizaría de tal manera el aparato productivo del país, que Colombia podría insertarse productivamente con éxito en el mercado internacional. De esta manera se sentarían las bases para la modernización de la sociedad colombiana. "Bienvenidos al futuro" era el lema de Gaviria.

Hoy ese optimismo hace parte del pasado y ya se ven las grietas de esa apertura económica. Este modelo económico, no sólo no ha resuelto los problemas estructurales, sino que ha acentuado las desigualdades, extendido la pobreza y acelerado el deterioro del ambiente. Los analistas de la economía colombiana plantean serios interrogantes sobre la capacidad de nuestra economía para "competir o resistir la competencia de bienes importados y para alcanzar una inserción al mercado internacional bajo el proceso de globalización".

El economista Luis J. Garay, va aún más allá, al señalar que en una sociedad como la colombiana, con "una cultura adversa a la inversión y a la acumulación de capital, y más proclive al consumo", la apertura, no logró cambiar la estructura productiva de su economía, y por el contrario terminó desindustrializando al país, aumentando desafortadamente el consumo externo⁷, desarrollando de manera "anormal" el sector terciario (servicios financieros, servicios de gobierno, sector de las comunicaciones, etc.) y de paso dándole un fuerte golpe al sector de la agricultura, contribuyendo más a la emigración rural, sin que este campesinado empobrecido pudiera ser absorbido productivamente en las ciudades.

⁶ Últimamente es el conflicto armado el que ha provocado la desocupación del campo colombiano y acentuado la inequidad en la tenencia de la tierra. El conflicto por el acceso y control sobre la tierra y por el uso del suelo ya no lo define únicamente la expansión de la frontera ganadera. Ahora cobra cada vez más importancia el establecimiento de monocultivos de banano, palma africana, coca y amapola, la explotación de petróleo, minerales y el agua misma.

⁷ Un consumo que es suntuario, pues no contribuye a mejorar el sistema productivo.

El campo colombiano se convierte así en uno de los mayores damnificados de la apertura económica.⁸

9. Saqueo de los recursos naturales

Junto a la producción de drogas ilícitas, al contrabando, a la corrupción y últimamente al secuestro, la *extracción de los recursos naturales* es otra de las actividades que más produce rentas. El oro, las esmeraldas, el petróleo, el carbón, la madera, etc., son actividades lucrativas, predilectas por intereses económicos egoístas, que utilizan sus influencias en el Estado para hacerse a jugosas concesiones para la explotación de estos recursos.

Un primer inconveniente de estas actividades extractivistas es que no existen medios, a pesar de todas las normas existentes, para lograr distribuir a todas las regiones y a todas las comunidades, los beneficios generados por la explotación de estos recursos que son de todos los colombianos.

El segundo inconveniente es la miseria y violencia que su aprovechamiento genera en su entorno. Paradójicamente las regiones mejor dotadas con riquezas naturales, son aquellas donde se encuentran los focos más conflictivos y violentos del país, con las cifras más altas de desplazamiento, asesinatos y secuestros. Regiones relativamente jóvenes, en pocos años se han convertido en regiones decrepitas al entrar en el engranaje de esta actividad extractivista.

La miseria y la violencia se trasladan a estas regiones, para quedarse. Las zonas esmeralderas de Boyacá, las petroleras de Arauca y Casanare, las coqueras en Guaviare y Putumayo, etc. ejemplifican esta situación. La vasta y múltiple región del Pacífico ha entrado en esta dinámica y ya se sienten las consecuencias. Sobre ella están puestos los ojos de muchos "empresarios" rapaces y capitales "golondrina" que se desplazan de un sitio a otro buscando estas rentas. De allí la disputa por el control de estas regiones.

Las rentas ocasionadas por estas actividades depredadoras sobre los recursos naturales son las que han agudizado, y en gran parte generado los conflictos armados más cruentos del país, con su ya conocida degradación humanitaria. Ya de estas razones podemos entender porque el Pueblo indígena U'wa, sin menoscabo de sus razones culturales, se oponga radicalmente a la exploración de hidrocarburos en su territorio.

Esta visión rentista, de búsqueda de beneficios privados del corto plazo, es la que ha conducido a que sigamos siendo un país exportador de materias primas que son colocadas en los mercados sin ninguna transformación y sin una visión económica estratégica, desde el punto de vista del desarrollo. Por lo general estos recursos son extraídos con capital y tecnologías externas a la región, en donde no tienen cabida la creatividad y el trabajo de sus pobladores. Por el contrario, estas tecnologías disuelven sistemas tradicionales de producción y de apropiación de la naturaleza, sostenibles y acordes con las necesidades y culturas de las regiones.

Un análisis económico más detenido nos muestra también como muchas de estas actividades extractivistas, no contribuyen al desarrollo de una economía local, regional, y aún nacional. En gran medida son estas economías de enclave, las causantes del atraso, dependencia y marginalidad económica y social de algunas

⁸ Colombia, a pesar de poseer una excelente oferta ambiental y un enorme potencial en tierras agrícolas, no ha podido garantizarle a su población la autosuficiencia alimentaria. Es más, en estos 10 años de apertura económica, el país descendió del 48° al 68° puesto en el escalafón de Desarrollo Humano. El país no produce adecuadamente alimentos estratégicos como proteínas, granos y aceites, pero sí destina sus mejores tierras a producir demandas del mercado mundial, como café, flores, caña de azúcar, banano, coca y amapola. El país pasó a ser en pocos años importador neto de trigo, maíz y lentejas de Canadá y Estados Unidos, plátanos de Costa Rica y Ecuador, mangos de Ecuador, kiwis de Australia, uvas, manzanas y peras de Chile, yuca seca de Indonesia y Tailandia, recientemente arroz de Venezuela y soya de Bolivia.

regiones.

10. La depredadora economía de la coca

Por último quisiéramos referirnos a los cultivos ilícitos, en el contexto del saqueo de los recursos naturales. La coca aunque es un producto agrario, su ciclo económico está más vinculado a las *economías de enclave* que a las economías propias de la región. En ese sentido es válido para ella el análisis que hacemos de las economías extractivistas, pues los valores que genera se realizan por fuera de la región. Además con el gran inconveniente de que la economía de la coca es el negocio más "pauperizador y depredador" para la región y para el país que la produce. Garay señala que las ganancias para la región productora son "ínfimas" en comparación con las etapas finales del narcotráfico, donde la gran parte del botín, es apropiada (se realiza) en los países consumidores por vía de la "distribución minorista, el lavado de dólares y la especulación financiera".

Pero los costos para la región productora son muy altos: La ampliación de la frontera agrícola (para los cultivos) a costa del bosque natural, la destrucción de flora y fauna y contaminación de ríos por las fumigaciones, la descomposición social (junto con procesos de enajenación cultural y pérdida de identidad), la desestructuración de las economías campesinas e indígenas, el desarraigo al territorio, la violencia que se engendra por el control de estas zonas, el costo en vidas y en fin, hasta el número tan alto de población carcelaria en el país y en el extranjero (como "mulas" en Estados Unidos y Europa) debido a este, con razón llamado "flagelo".

11. Entre el orden y el desorden improductivos

La presencia que hace el Estado en todo el país está constituida por un aparato legal, que ostenta una apariencia de orden. Y decimos apariencia, porque en la práctica su presencia y acciones son tan confusas e inconsistentes, que provocan la parálisis de cualquier proyecto transformador. Este tipo de *orden legal improductivo* genera a mediano plazo una inoperancia de las estructuras que se crean para ejecutar los proyectos o para incidir en el desarrollo de las regiones o para proteger el patrimonio natural. Así por ejemplo tenemos una de las legislaciones más adelantadas en materia ambiental. No obstante los ríos Magdalena y Cauca, que le han dado el sustento a miles de familias ribereñas, están al borde del colapso ecológico por su contaminación. Y el río Sinú por efectos de una represa, ocasiona daños ambientales de enormes proporciones y elimina la oferta de pescado, de la cual vivían centenares de familias de pescadores e indígenas. De igual forma desaparecen anualmente varias especies de fauna y flora de nuestro panorama, sin contar las miles de hectáreas de bosque virgen que son taladas y las otras miles que sucumben a la erosión.

Este *orden legal improductivo* legitima a su vez un orden jerárquico de miles de funcionarios de instituciones encargadas de salvaguardar lo que reglamentan. Basta sólo mirar los organigramas, normas, legislaciones, cronogramas, redes, etc., acompañadas de sus respectivos órdenes jerárquicos, para entender las dificultades prácticas de intentar modificar la realidad por esta vía.

Un ejemplo de este *orden legal improductivo* nos lo muestra el funcionamiento de muchas instituciones del Estado: Mientras el Ministerio del Medio Ambiente declara zonas de reserva forestal, a un nivel inferior, funcionarios de las corporaciones dan concesiones de explotación maderera a particulares y el Instituto de Reforma Agraria (INCORA) titula tierras dentro de estas áreas. Mientras los organismos y las políticas de fomento agrario debieran de promover al pequeño campesino, lo cierto es que la mayor parte de los beneficios los reciben medianos y grandes propietarios. Mientras que el Ministerio del Medio Ambiente recomienda no extender créditos para ganadería en zonas no aptas para uso agropecuario (Pacífico, Amazonia), este es un renglón predilecto por algunos organismos de crédito agropecuario. Mientras unas instituciones no impulsan

nuevas colonizaciones, otras las publicitan.⁹ Mientras los militares tienen la función de salvaguardar las fronteras, en realidad es lo que menos han hecho. Y así sucesivamente podríamos analizar las otras instituciones del Estado, la iglesia y las O.N.G.s.

Frente a este *orden legal improductivo* del Estado, muchos actores sociales y personas de las clases dirigentes establecen el "*desorden improductivo*", una especie de tipología de comportamiento que alguien denominaba de "anarquía dependiente", es decir, una suerte de comportamiento de individuos que hacen imperar su propia ley en los actos cotidianos (desde apoderarse de tierras, desalojar campesinos e indígenas, hasta incendiar un bosque, pasarse un semáforo en rojo, o asaltar el erario público). Pero a la vez y por paradoja, son absolutamente sumisos y dependientes ante las autoridades que ellos legitiman por el ejercicio de la fuerza, y sin ninguna mediación de razones.

Un ejemplo de este *desorden improductivo* lo vemos en los cientos de grupos de autodefensa (legales e ilegales) y grupos guerrilleros que existen en el país, dedicados a imponer su ley a campesinos, indígenas, obreros, etc., cada grupo con sus propias jerarquías y lealtades a sus jefes políticos.

⁹ No hace muchos años comentaban los indígenas de Pueblo Nuevo (resguardo Páez del Cauca), que un funcionario del "Plan Nacional de Rehabilitación" les había sugerido sembrar amapola, pues después de la bonanza de la cocaína, venía la bonanza de la heroína, y que ya que de todas formas se iban a establecer estos cultivos, ellos deberían también beneficiarse de ellos.